

235
noviembre-diciembre
2020

Directora general:
Carmen Lira Saade
Director fundador:
Carlos Payán Verver
Director: Iván Restrepo
Editora: Laura Angulo

 **La Jornada**

ecológica



Pueblos indígenas, entre la defensa de sus territorios y la Covid-19

Números anteriores

◀ Correos electrónicos: ivres381022@gmail.com • estelaguevara84@gmail.com

Presentación

En julio pasado, la Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló que las comunidades indígenas son especialmente vulnerables a la pandemia de coronavirus por sus malas condiciones de vida. Ese mes se habían reportado más de 170 mil casos entre los pueblos indígenas en América, con más de 2 mil muertes. Instó, por tanto, a las naciones a tomar todas las precauciones de salud necesarias, con especial énfasis en el rastreo de contactos, para tratar de frenar la propagación de Covid-19. “No tenemos que esperar una vacuna. Tenemos que salvar vidas ahora”, señaló la OMS.

En efecto, los pueblos indígenas son una de las comunidades más propensas a infectarse de coronavirus en América Latina. Pobreza, falta de agua y enfermedades previas (dengue, malaria, tuberculosis) debilitan a los pueblos ante la llegada de un virus desconocido. No solo pone en riesgo la salud de las personas, sino que puede ocasionar el exterminio de culturas enteras.

A pesar de su peso cada vez más reducido en las sociedades contemporáneas, las comunidades campesinas e indígenas son muy importantes e indispensables para el futuro del planeta por habitar y muchas veces proteger y conservar territorios que brindan beneficios fundamentales, más allá de los ámbitos locales. La producción de alimentos sanos, la captación y purificación del agua, la captura de carbono que contribuye a mitigar el cambio climático, la preservación de los hábitats para la diversidad biológica de importancia global de Mé-



xico y América Latina. Sin embargo, esas poblaciones se encuentran entre las más pobres de los distintos países.

Con la serie de conversaciones que llamaron “Covid-19 y comunidades: impactos y vías para la reconstrucción en América Latina”, quienes conforman el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, buscaron conocer y compartir las formas en que la pandemia afecta a estos mexicanos y latinoamericanos y a los territorios que habitan, poseen y resguardan.

Los participantes encontraron situaciones estremecedoras, con una gran vulnerabilidad frente a la pandemia. Sobre todo de quienes deben

La defensa contra la nueva pandemia es una necesidad destacada para los pueblos indígenas de la Amazonia, por la debilidad inmunológica y la dificultad para acceder a servicios de salud que confrontan muchos de ellos
Foto: Coica-OPS

En portada: el presidente de la comunidad quechua willoq, Gregorio Melo
Foto: Álvaro Franco, en Sustainability, noticias de sostenibilidad

noviembre-diciembre
2020

trabajar fuera de las comunidades. Se encontraron también con un avance acelerado de megaproyectos agroindustriales y mineros, favorecidos por las condiciones de encierro y el desmantelamiento institucional. Todo ello está generando deforestaciones masivas y pérdidas irreversibles de sistemas ambientales.

Igualmente, hallaron casos en los que la organización y resistencia en distintas latitudes llevan a proteger a las comunidades y a la naturaleza. Asomarse a esta realidad tan invisible para quienes habitan en ciudades es un paso necesario para tejer nuevas formas de solidaridades y reconocimiento. Cobrar conciencia de las amenazas y la vulnerabilidad de las co-

munidades campesinas, indígenas y de la naturaleza que resguardan es también fortalecer nuestra posibilidad de una vida sustentable.

Por todo ello, este número de *La Jornada Ecológica* reúne varios textos que muestran la realidad en que viven los grupos indígenas en varios países de América Latina. Una forma de avanzar en el conocimiento de la realidad en que se desenvuelven, los problemas que enfrentan y la acción comunal que realizan para conservar su identidad, su cultura ancestral y su entorno natural.

Deseamos agradecer el apoyo que para este número nos brindaron las maestras Cecilia Navarro y Leticia Merino.

Covid-19 en las comunidades indígenas de América Latina

Leticia Merino, David Kaimowitz, Sergio Madrid, Alfonso de la Vega y Lucía Madrid

Correos-e respectivamente: merino@sociales.unam.mx, kaimowitzd@gmail.com, smadrid@ccmss.org.mx, poncho.delavega@gmail.com y lmadrid@ccmss.org.mx

El mundo vive un colapso ambiental sin precedentes: el riesgoso cambio del clima, la contaminación y agotamiento de las aguas y los suelos, la pérdida acelerada de bosques y de biodiversidad y la acidificación de los océanos. La pandemia creada por la propagación del virus SARS CoV-2 es uno de los primeros impactos globales de la crisis del sistema Tierra, resultado de décadas de actividades de producción y consumo profundamente insustentables.

Pero ésta no es solo una crisis natural, ha alcanzado graves dimensiones debido a la falta de inversión de los Estados en prevención y salud pública y a la prevalencia de la pobreza y desigualdad. Como sucede en otras crisis, la Covid-19 afecta desmedidamente a los más vulnerables: los trabajadores informales – que en México ascendían a 50 por ciento de la fuerza laboral desde antes de la pandemia –, las comunidades campesinas e indígenas.

Durante las últimas décadas de intensa globalización económica, la riqueza ha crecido aceleradamente pero ha sido acaparada de forma desmedida por las elites globales. A pesar de las promesas de bienestar que acompañaron el impulso de la globalización, fuera de China, la pobreza y el hambre se mantienen en la mayoría de los países del “sur global”. Allí las comunidades indígenas y campesinas viven en una gran pobreza, a pesar de su riqueza de organización, conocimiento y solidaridad humana. Sus condiciones de precariedad y carencias se han exacerbado con la pandemia.



Aunque América Latina es una región altamente urbanizada, alberga algunos de los territorios de mayor riqueza natural y biodiversidad del mundo. Estos territorios han sido protegidos y apropiados por comunidades indígenas y campesinas durante generaciones. Muchos fueron “regiones de refugio” (Aguirre Beltrán, 1991), donde indígenas y descendientes de los africanos esclavizados escaparon de la sobrexplotación, la cristianización forzada y el sometimiento que imponían los conquistadores y sus herederos. Las comunidades hoy son azotadas por una

Foto: FILAC, archivo ANSA

Este trabajo es resultado de los seminarios “Comunidades y Covid-19” organizados por el Seminario Universitario Sociedad Medio Ambiente e Instituciones, en julio y agosto de 2020. Agradecemos la participación Anthony Bebbington quien coordinó la mesa sobre “Comunidades, Covid y extractivismo”

noviembre-diciembre 2020

fuerte oleada de megaproyectos que generan la mayor pandemia mundial de deforestación y pérdida de diversidad biológica de la historia. A la crisis del Covid-19 se añade la comorbilidad de los grandes incendios forestales con que ganaderos, sojeros, aguacateros y criminales buscan expandir sus actividades en los territorios campesinos e indígenas.

Esta inmensa destrucción es consecuencia de otra imposición neoliberal: el extractivismo de minerales, petróleo, agua, árboles y de la fertilidad misma de la tierra. La extracción de minerales en

Latinoamérica tiene una larga historia, pero el extractivismo actual tiene una intensidad inédita, resultado de los altos precios de estos productos que en años pasados promovieron fuertes inversiones. En torno a ellas se generaron pactos políticos perversos entre inversionistas internacionales y las elites de los países, planteando las actividades extractivas como el camino para el desarrollo de la región.

Este proceso, que Marisela Svampa llama el “consenso de las commodities”, se acompaña de altísima conflictividad al concesionarse enormes extensiones de tierra sin pre-



vio conocimiento ni consentimiento de las comunidades afectadas.

Las respuestas incluyen tanto la protesta como la negociación. Abundan homicidios de líderes y criminalización de los opositores de los proyectos extractivos y en distintos países se vive una fuerte reducción del espacio cívico. Estos grandes abusos resultan aun más desafiantes en tiempos de Covid-19.

Para la primera semana de agosto de 2020, América Latina, una de las regiones más desiguales de la Tierra, concentraba el mayor número de contagios y 64 por ciento de las muertes globales por Covid-19 aunque sus habitantes representan 13 por ciento de la población mundial. Las décadas de políticas de ajuste estructural, reducción de la inversión pública, pri-

vatización y precarización de los servicios de salud, educación, seguridad y acceso al agua han resultado en la exclusión de muchos latinoamericanos del acceso a estos bienes y servicios, básicos para una vida digna, que –en palabras de la líder quechua Melania Canales– han dejado de ser derechos, convirtiéndose en privilegios.

Las privaciones son más graves en países como México y Colombia, donde durante los años de auge de los precios de las *commodities*, no existieron gobiernos de orientación social que distribuyeran parte de las ganancias en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías, como sucedió en otros países de Sudamérica.

Las comunidades enfrentan hoy el dilema de mantener o cortar sus accesos al mun-

Los niños recibieron sus cubrebocas, para sus madres no es fácil usarlos

Foto: Atalayar

do exterior, sostener contactos con los mercados de trabajo y mercancías y con los gobiernos a riesgo de incrementar la presencia del virus en lugares carentes de acceso a servicios médicos, o aislarse. Los servicios públicos de educación y acceso a la justicia se han suspendido, aunque no los atropellos, asesinatos e incendios, en contextos de ausencia del Estado de derecho. Frente a esta crisis se han multiplicado las iniciativas comunitarias para levantar información, presionar a los gobiernos, fortalecer la medicina tradicional, la soberanía alimentaria y la solidaridad comunitaria.

Mientras muchas comunidades se han cerrado, las industrias extractivas han recibido trato preferencial de los gobiernos y continuaron operando durante la cuarentena.

Han aumentado su control territorial y a menudo han sido centros de transmisión de Covid-19. Posiblemente las industrias extractivas seguirán recibiendo tratos preferenciales en la reactivación económica pasada la crisis de Covid-19. En Brasil, el gobierno central ha declarado que la pandemia permitirá acelerar la inversión y la flexibilización regulatoria para impulsar las actividades extractivas.

El rezago social exacerbado por la pandemia, el hambre en las regiones indígenas, la carencia de medicamentos en hospitales públicos, el riesgo de mantenerse trabajando por ingresos ínfimos son ecos de la gran tragedia acaecida en América hace 500 años, cuando millones perdieron la vida y grandes civilizaciones fueron arrasadas por la invasión europea.

Comunidades indígenas y campesinas en México

Javier Bautista de la Torre y Pedro Álvarez Icaza

Correos-e: bautista.delatorre@gmail.com
y alvarezicazapc@gmail.com

México enfrenta la Covid-19 con instituciones de salud colapsadas. Los contagios y las defunciones han superado ampliamente las previsiones iniciales del gobierno. Muchas comunidades se han resguardado tanto como han podido, reduciendo sus actividades y reuniones, pero en las numerosas regiones donde se enfrentan a megaproyectos, éstos han permanecido, intensificando su actividad.

El seguimiento de la "jornada nacional de sana distancia" al inicio de la pandemia generó graves problemas económicos en las comunida-

des. Se teme que la reapertura económica en las ciudades favorezca la expansión de la pandemia en círculos concéntricos hacia comunidades rurales, donde los contagios han llegado después de la propagación urbana de la epidemia. El desgaste económico crece y se enfrentan crisis alimentarias que empujan a indígenas y campesinos a trabajar fuera de sus pueblos.

La dependencia excesiva de subsidios del gobierno ha resultado contraproducente para muchas comunidades, promoviendo el abandono de la agricultura. Según la Comisión Nacional para el Conoci-

miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las zonas con mayor marginación coinciden con las zonas de más alta biodiversidad. La población rural mexicana es muy vulnerable: en 91 por ciento de las comunidades menores a 2 mil habitantes, 41 por ciento tiene más de 60 años, 16.4 por ciento está en pobreza extrema y los menores padecen desnutrición crónica, 29 por ciento tiene diagnósticos de diabetes y sobrepeso, 45 por ciento sufre hipertensión, no hay médicos y las brigadas de salud han dejado de visitar los pueblos. Quienes enferman gravemente deben trasladar-

se en transporte público, aumentando el riesgo de contagio. La información que provee el gobierno no es útil, faltan explicaciones sobre la pandemia y las medidas de salud física y mental a adoptar. La mayoría de las clínicas Covid se encuentran a distancias de entre dos a cinco horas de las comunidades y muchos ignoran su ubicación.

Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en agosto de 2020 la tasa de letalidad de quienes en México enferman de Covid-19 era de 13 por ciento, entre los indígenas estaba entre 18 y 21 por ciento.

Indígenas zapatistas de Chiapas, México, antes de la pandemia
Foto en Acustik noticias



Estragos en las comunidades mayas de la península de Yucatán

Sara Cuervo

Correo-e: scuervo@ccmss.org.mx

En las comunidades mayas de la península de Yucatán se vive una crisis social y ambiental que la pandemia ha agravado. Las dimensiones reales de la pandemia en la península se desconocen, existe fuerte subregistro de los contagios y las muertes que ha ocasionado el Covid-19, aunque la tasa de letalidad entre los mayas del estado de Yucatán es de 33 por ciento y de 25 por ciento en Quintana Roo. Los municipios con mayor contagio son aquellos con trabajadores migrantes en la zona turística de Cancún y playa del Carmen donde, entre marzo y mayo de 2020, 104 mil personas perdieron su empleo y regresaron a sus pueblos. La crisis se agravó con las lluvias torrenciales del mes de junio que ocasionaron inundaciones, pérdida generalizada de cosechas y de apiarios.

Se han generado reflexiones sobre las capacidades comunitarias de mantener a los que regresan y acuerdos para establecer en algunas comunidades filtros de entrada, protocolos de monitoreo y tratamiento de quienes enferman, mapeos para identificar a los más vulnerables al Covid-19, acuerdos para el intercambio de productos y colaboración entre mujeres para cuidar a los niños ante el incremento la demanda de cuidado para las mujeres. Las familias que enferman siguen cuarentenas y se les provee alimentos.

La imposición del megaproyecto del Tren Maya por el gobierno federal hace aún más compleja la situación de las comunidades peninsulares. Con el tren se busca incrementar en 400 por ciento



las visitas de turistas a la región, generando grandes impactos en la frágil hidrología de la península y en las formas de vida comunitarias.

En la zona turística existe una de las mayores tasas de homicidios del país asociada a actividades de trata de personas y narcotráfico que se teme aumenten a partir del crecimiento del turismo. Las consecuencias del despojo y pérdida de identidad generados por el turismo masivo han derivado en altas tasas de suicidio entre los jóvenes.

Para legitimar el proyecto del tren, el gobierno realizó en 2019 una consulta, cuya legitimidad ha sido cuestio-

Sobreviviendo a la pandemia en Yucatán, México
Foto: hazruido.com

nada por organizaciones sociales peninsulares y por el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. En abril, ya durante la pandemia el presidente inauguró la construcción del primer tramo de la obra, asignando contratos por 70 mil millones de pesos, en el contexto de fuertes carencias de servicios de salud y centenares de muertos indígenas.

Las comunidades mayas han interpuesto demandas de amparo que no han sido admitidas por el cierre de los tribunales lo que, sumado a la dificultad para reunirse, crea dificultades adicionales para acceder a la justicia.

Mientras, la precariedad acentuada por la pandemia está acelerando la venta de tierras ejidales, favoreciendo la especulación sobre la tierra. Es claro que para el gobierno mexicano en la península de Yucatán la construcción del tren y no la salud pública es la actividad esencial.

La pandemia ha hecho evidente la urgencia de sociedades más justas en tierras mayas, donde los pueblos buscan crear articulaciones regionales, reconstruir la milpa y la apicultura, recuperar la lengua en medio de condiciones adversas que incluyen violación de derechos humanos, clasismo y racismo.

La gobernanza tradicional retoma su valor en las sierras de Oaxaca

Salvador Anta, Néztar Arrortúa, Marco Antonio González y Ariadna de Jesús Pérez

Correos-e respectivamente: salvanta@yahoo.com.mx, netzar60@yahoo.com.mx, maglezo.mag@gmail.com. y andaira76@hotmail.com

Oaxaca es el estado con mayor biodiversidad, presencia indígena y diversidad cultural en México, también una de las entidades con mayor pobreza. La propiedad social abarca la mayor parte de su territorio, 10 por ciento es propiedad de ejidos y 80 por ciento de comunidades agrarias. De los 570 municipios de Oaxaca, 417 se gobiernan por "usos y costumbres", sistema reconocido por la legislación estatal. En muchas comunidades, este sistema se basa en sólidas prácticas de democracia directa, con funcionamiento constante de asambleas y ejercicio de cargos. Así se eligen las autoridades de las comunidades y los municipios, sin participación de partidos políticos y con fuerte sentido de servicio comunitario. Los cargos del gobierno de los pueblos se cubren generalmente de manera honorífica, aunque las autoridades comunitarias tienen que prestar atención inmediata a los problemas comunitarios, rendir cuentas con transparencia y están sujetas a remoción en caso de no cumplir adecuadamente. El *tequio* –trabajo colectivo en obras de beneficio social y protección ambiental que prestan los comuneros, comuneras, ciudadanos, ciudadanas y jóvenes– es parte del sistema de organización tradicional que plantea fuertes exigencias, pero ha permitido a muchas comunidades mantener la paz social y el cuidado de los territorios.

Más de 70 por ciento de las tierras oaxaqueñas son forestales con gran diversidad de ecosistemas donde viven 660 mil personas. Desde hace 30 años, distintas comunidades forestales producen y trans-



forman madera, generando empleos e ingresos locales. Algunas han constituido empresas, varias certificadas por el Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC), particularmente en la Sierra de Juárez.

Los contagios de Covid-19 han sido menores en las regiones donde prevalece el sistema de gobernanza tradicional, la Sierra Sur y la Sierra de Juárez, donde asambleas y autoridades han establecido filtros para controlar las entradas y salidas de los pueblos, ante la incapacidad de las instituciones de gobierno para proteger la salud. Los contagios son mayores en la ciudad de Oaxaca y la región de la costa, con actividades

Foto:
MongabayLatam/
Juan Mayorga

orientadas al turismo, donde la organización comunal se ha debilitado, en los Valles Centrales donde operan empresas mineras y en el istmo de Tehuantepec donde durante la pandemia el gobierno estatal ha impuesto nuevas concesiones eólicas con el apoyo del crimen organizado. En las regiones con contagios hay un enorme subregistro, y el número de camas disponibles como criterio para definir los semáforos sanitarios carece de sentido dada la extrema precariedad de los servicios de salud.

La Sierra de Juárez posee una gran riqueza cultural, con más de 300 comunidades zapotecas, mixes y chinantecas

y una enorme biodiversidad, por la que es considerada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como región terrestre prioritaria para la conservación. Los territorios de la sierra tienen un alto grado de conservación a partir de esfuerzos comunitarios.

Desde hace 10 años, la región enfrenta la expansión de concesiones mineras que amenazan la integridad de los ecosistemas y de las comunidades indígenas. 53 mil hectáreas, muchas de ellas forestales han sido concesionadas para la extracción minera por la Secretaría de Economía. Casi todas estas concesiones están en fase de exploración,

Capulálpam posee una fuerte tradición de manejo territorial y una sólida gobernanza a partir de los instrumentos que la comunidad se ha dado, como el protocolo comunitario de defensa contra el Covid-19, que ha permitido mantener trabajando algunas de sus empresas comunitarias

75 por ciento se proyecta para extracciones de tajo a cielo abierto, con enormes consecuencias ambientales y de afectaciones a la salud. Las comunidades resisten, conscientes de los desastres y conflictos en las regiones mineras de Valles Centrales, Guerrero y el norte del país.

En la sierra, la comunidad de Capulálpam sostiene desde hace años una batalla jurídica contra Minera Natividad y en 2019 obtuvo una sentencia favorable que no ha sido implementada, tampoco ha tenido respuesta su apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras, la minera sigue operando, dejando clara la necesidad de la movilización comunitaria para impedir que los megaproyectos se apropien de la sierra oaxaqueña.

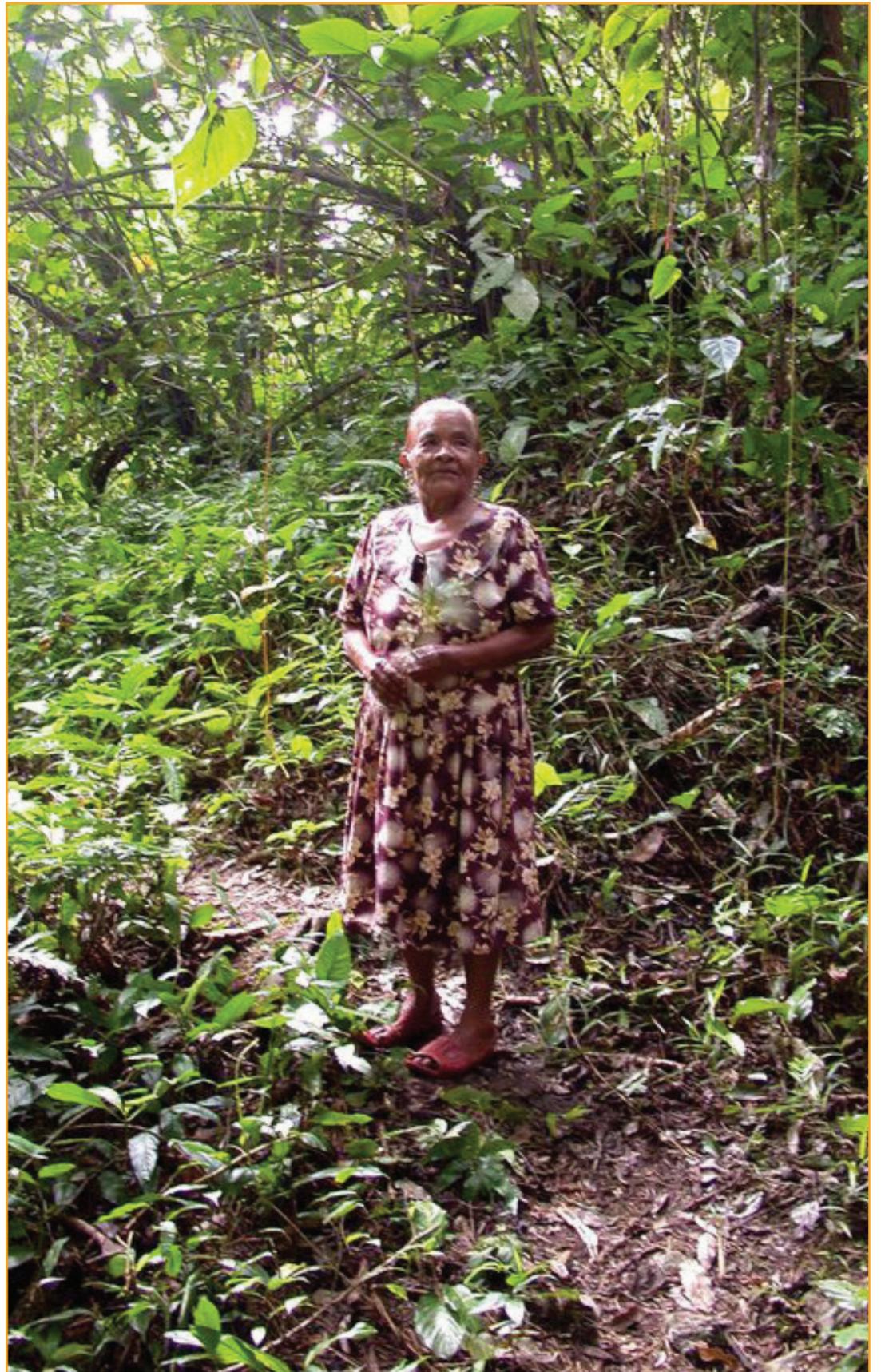
Capulálpam posee una fuerte tradición de manejo territorial y una sólida gobernanza a partir de los instrumentos que la comunidad se ha dado, como el protocolo comunitario de defensa contra el Covid-19, que ha permitido mantener trabajando algunas de sus empresas comunitarias. A pesar de que la pandemia ha reducido la demanda de los productos forestales que Capulálpam produce y se ha cerrado el turismo, se ha fortalecido el comercio local y se ha reactivado la agricultura. A partir de los ingresos de las empresas comunitarias, las autoridades reparten víveres a las familias en necesidad.

Las organizaciones regionales: las Unión de Comunidades de la Sierra Juárez, la Unión Liberal de Ayuntamientos, la Unión Zapoteco-Chinanteca, y la Coordinadora Regional de la Chinantla, se

han movilizado emprendiendo campañas regionales de información, reparto de cubrebocas y desinfectante, buscado agilizar los trámites ante las autoridades forestales y de salud.

En la Sierra Sur, la mayor preocupación es el abasto de alimentos. Se vive el reto del regreso de jóvenes con nuevas perspectivas, no siempre respetuosos del sistema de gobierno tradicional. Estos cambios llevan a repensar la gobernanza y el manejo del territorio, incluyendo a los jóvenes en la toma de decisiones y considerando ampliar la frontera agrícola para darles tierras. La crisis lleva también a replantear la estrategia económica de los pueblos, basada en la producción de café de sombra para la exportación que ha permitido no caer en el mercado de *commodities*, ante mercados cerrados y precios históricamente bajos. Las preocupaciones por construir economías locales prósperas no encuentran eco en las políticas públicas, que desconoce a las organizaciones sociales y manejan los programas con la mayor parte de la inversión como Sembrando Vida, con gran improvisación y orientación clientelar.

Los mayores impactos de la pandemia en la Sierra Sur se refieren a: la disminución de los ingresos y empleos al caer el mercado del café y los ingresos de las empresas turísticas comunitarias. Pero las acciones comunitarias contra la pandemia han permitido revalorar los espacios locales: la importancia de la organización comunitaria para detener los contagios y el regreso al cultivo de la milpa para el consumo local.



*Paisaje de La Chinantla, Oaxaca
Foto: Elsa Orozco*

En los Valles Centrales de Oaxaca, la defensa del territorio está en pausa por la Covid-19

José Pablo Antonio

Correo-e: josepabloant@gmail.com



En los Valles Centrales de Oaxaca, 80 mil hectáreas han sido concesionadas a la minería echando mano de engaños y del uso de la fuerza pública; hay testimonios de que personas mayores, analfabetas y con escaso manejo del español fueron engañadas para que pusieran huella digital en documentos de cesión de derechos de la tierra, en ausencia de asesoría legal adecuada.

A partir de la instalación de la minería, el acceso al agua es crecientemente conflictivo. En 1967 se estableció en los Valles de Oaxaca una veda al uso agrícola del agua del río Atoyac, y en 1992 la nueva Ley de Agua desconoció los derechos de las comunidades al agua. La minería, en cambio, tiene acceso preferencial al agua, generando fuerte escasez, contaminación y afectaciones a la salud.

En octubre de 2018 se derramó la presa de jales de San José del Progreso, propiedad de Minera Cuzcatlán. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tardaron más de un año en presentarse en la región, concluyendo que "no había contaminantes en los cuerpos de agua". Se narra que durante una de las visitas de Profepa uno de los inspectores llevaba puesto un chaleco con el escudo de la minera, así como un gafete que lo acreditaba como funcionario de la procuraduría.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de Minera Cuzcatlán, incluyendo el asesinato de cuatro líderes comunitarios, han sido constantes. Ha fomentado la división comunitaria y con la



Imagen de Avispa Midia

complicidad de la secretaría estatal de gobierno, hostiga a las autoridades locales cuando denuncian violaciones. Durante la pandemia han aumentado las agresiones a defensores indígenas con menor capacidad de protegerse en el encierro. Entre el fin de julio de 2020 y mediados de agosto han sido asesinados ocho líderes indígenas.

El ex relator de la ONU para derechos humanos, Mike Taylor, declaró que en la región, durante el confinamiento, los defensores son blancos fáciles, dejando "cancha abierta" a los megaproyectos. Recomendó al gobierno de México abstenerse de promover medidas que dañen el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado, pues no existen condiciones para realizar consultas válidas. Declaró que las comunidades mejor prepara-

das para resistir la pandemia son las que tienen sistemas de autogobierno y espacios de ejercicio de su autonomía.

Muchas comunidades en esta región han establecido filtros para controlar sus accesos. En las condiciones de encierro, las reuniones comunitarias son difíciles de realizar, pero las mineras siguen trabajando, amparadas por la definición del gobierno federal de la minería como actividad esencial. Minera Cuzcatlán ha seguido contaminando el agua.

En julio de 2020 se presentó un nuevo derrame en los cuerpos de agua sin que las instituciones responsables tomaran ninguna medida. Con el agua contaminada con complacencia de la Conagua, es imposible seguir las medidas de higiene contra la pandemia. La minera ha buscado limpiar su imagen, repartiendo materia-

les sanitarios, pueblo por pueblo, al tiempo que mantiene grupos de choque armados para proteger sus instalaciones. Se dice que han muerto trabajadores de la mina por Covid-19.

Mientras las autoridades tratan los temas ambientales como asuntos administrativos y no de derechos humanos, la lucha jurídica contra la minería no se puede sostener sin resistencia y defensa comunitarias. En medio de la cuarentena es necesaria la articulación regional para la defensa de los territorios. La desigualdad en el acceso a la justicia obliga a los pueblos a luchar contra el Estado y contra las empresas.

En ejercicio de su derecho a la autodeterminación, las comunidades de los Valles Centrales y la Sierra de Juárez se han declarado territorios libres de minería.

Amanalco y Valle de Bravo, en lucha contra las trabas burocráticas

Andrés Juárez

Correo-e: ajuarez@ccmss.org.mx

La cuenca de Amanalco-Valle de Bravo, con 61 mil y 17 mil hectáreas bajo sistemas de manejo territorial integrado, aporta 10 por ciento del agua que consume el Valle de México; además, la cuenca provee alimentos para la población local y otros servicios ambientales. La cuenca forma parte de un sistema de cuatro áreas naturales protegidas: el área de protección de flora y fauna del nevado de Toluca, el área de protección de recursos naturales Valle de Bravo-Temascaltepec, la reserva de la biosfera de mariposa monarca y el parque nacional Bosencheve.

En la cuenca hay 266 localidades que suman más de 200 mil habitantes, con grados de marginación medio y alto, y un alto crecimiento poblacional y urbano, relacionados con la expansión del turismo en Valle de Bravo. Muchas personas de la región trabajan en las ciudades de México y Toluca en servicios, en la construcción y como empleados domésticos y regresan a sus pueblos los fines de semana.

Desde hace 15 años, 11 comunidades en la cuenca llevan a cabo actividades manejo y producción forestales, agrupadas en la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. Cuentan con fuerte organización para la protección del bosque y la toma colectiva de decisiones, poseen conjuntamente un aserradero que les permite vender madera en tabla y agregar valor a su producción.

Inicialmente, la Covid-19 se percibía como algo lejano, había más preocupación por el riesgo de incendios forestales y el retraso de las lluvias. La información que provee el go-



bierno federal resultaba ajena y poco útil, con recomendaciones que no se adaptan a las dinámicas de la vida cotidiana en el campo. La adopción de medidas de protección como el uso de gel, caretas y cubrebocas fue muy tardía. Muchos de los trabajadores en México y Toluca perdieron sus empleos y regresaron a los pueblos, provocando contagios y un incremento del desempleo en las localidades. Entre algunos hubo resistencia a pe-

Aserradero en Amanalco, estado de México

Foto del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

dir atención médica de los enfermos por miedo a perder la vida y no poder seguir los ritos funerarios, lo que hizo más complejo el seguimiento y la contención del contagio.

Existen varios espacios de organización como las asambleas comunitarias, los comités de agua y la propia Unión de Ejidos, pero como medidas de protección frente a los contagios, las reuniones se suspendieron, y con ellas los espacios para la defensa co-

lectiva de los territorios para generar acuerdos en torno a medidas de sanidad y cuidado comunitario de los enfermos. Mientras los aprovechamientos forestales regulados se suspendieron por la imposibilidad de seguir los complejos trámites que impone la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con oficinas cerradas durante la pandemia. Con ello se han perdido medios de vida e ingresos comunitarios.

Cómo se enfrenta la crisis en la región maderera de Michoacán

Jaime Navia, Adolfo Chávez y Miguel Macías

Correos-e: jnavia@gira.org.mx,
consejocomunalcheran@gmail.com

El estado de Michoacán cuenta con 6 millones de hectáreas, más de la mitad son tierras forestales y más de la mitad de ellas son áreas de propiedad social. Desde hace 30 años la deforestación en Michoacán se ha acelerado debido a la expansión de las huertas de aguacate, el incremento de los incendios forestales y la tala ilegal.

Los aprovechamientos forestales legales comunitarios enfrentan exigencias y trámites desmedidos impuestos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y precios bajos en el mercado de la madera, influenciados por los precios de la madera ilegal. A ello se suma la venta de tierras para establecer huertas de aguacate, en complicidad con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.

En muchos pueblos se han provocado tensiones constantes entre lo colectivo y lo comunal que, junto a las divisiones creadas por la presencia de partidos políticos, redundan en el debilitamiento de la organización comunitaria. El crimen y la violencia, presentes en Michoacán mucho antes de la pandemia, se han recrudecido con ella. En los bosques es frecuente la presencia de personas armadas ajenas a las comunidades que los utilizan como paso, evitando los caminos más vigilados.

La sustitución de bosques por huertas se inició en la región purépecha, donde existen comunidades indígenas centenarias con derechos de propiedad colectivos sobre las tierras. Las comunidades purépechas poseen sistemas de organización tradicional,



que se han debilitado a raíz de la parcelación y venta de tierras y la tala ilegal. Aquellas donde la organización comunitaria se mantiene, como San Juan Nuevo Parangaricutiro y Cherán, las áreas forestales se conservan.

A raíz de la pandemia, cerraron las oficinas de la Semarnat y los trámites de los permisos de aprovechamiento

En este aserradero se utilizan árboles caídos y dañados
Foto: La Coperacha

forestal se rezagaron. La ineficiencia de los trámites afecta incluso los permisos para combatir plagas forestales, generando problemas muy fuertes.

Han caído el mercado de la resina –afectando a 50 mil resineros que en su mayoría son avocados sin derechos a la tierra– y la mayoría de los mercados de la madera con ma-

teria prima de origen legal e ilegal, aunque se mantiene la producción de tarimas para montacargas y cajas de madera para el empaque de aguacates, *berries* y mangos, cuya producción va en aumento.

Ha habido gran desinformación sobre la pandemia; inicialmente existía incredulidad sobre sus riesgos, aunada a la falta de servicios de agua

En San Juan Nuevo Parangaricutiro, la organización social ha sido clave para el desarrollo forestal, ha fortalecido la identidad comunal y los mecanismos de toma de decisiones colectivas sobre el territorio, basados en los usos y costumbres comunitarios

y salud en la mayoría de las comunidades. Muchas intentaron cerrarse, no permiten la entrada a los pueblos de gente externa, pero muchos deben salir a trabajar para mantenerse y las asambleas no los pueden detener.

Las mujeres han sido fundamentales en la protección comunitaria, aquellas cuyas familias tienen tierras volvieron a sembrar milpas, pero hoy muchas familias indígenas carecen de tierra, son artesanos, taxistas, empleados y han perdido sus fuentes de ingresos. El desbordamiento de la pandemia enfrenta a las comunidades a retos más grandes de lo que la mayoría de las pueden resolver.

San Juan Nuevo en la meseta purépecha es una de las comunidades forestales más exitosas en el aprovechamiento sustentable del bosque en Mé-

xico. Desde hace 35 años, realiza aprovechamientos forestales certificados por su buen manejo forestal, por parte del Consejo Mundial de Manejo Forestal, FSC por sus siglas en inglés. La actividad forestal integra el conjunto de las fases de la cadena de valor, desde el manejo del bosque –para el que la comunidad cuenta con su propio equipo técnico–, la extracción, transporte, aserrió, estufado y elaboración de productos terminados para su comercialización.

San Juan posee distintas empresas que generan ingresos y empleo para sus comuneros y para los de las comunidades vecinas: la de extracción y procesamiento de madera, la procesadora de resina, la de fabricación de muebles y una empresa turística. La organización social ha sido clave para el desarro-

llo forestal, ha fortalecido la identidad comunal y los mecanismos de toma de decisiones colectivas sobre el territorio, basados en los usos y costumbres comunitarios, con fuerte participación y rendición de cuentas de las autoridades comunitarias sobre los usos de los bienes comunes.

San Juan se encuentra en la zona idónea para la producción aguacatera; sin embargo, la asamblea ha impedido la parcelación de las tierras y la deforestación. De las 18 mil 138 hectáreas del territorio comunal, 68 por ciento tienen cobertura forestal, 63 por ciento corresponde al área bajo manejo forestal, 16.33 por ciento son áreas agrícolas y 6.6 por ciento, huertas de aguacate.

A partir de la pandemia, la actividad forestal se detuvo y la empresa turística cerró,

pero la agricultura para autoconsumo y la producción de aguacate se han mantenido, permitiendo a San Juan Nuevo enfrentar la crisis.

Desde 2011, la comunidad de Cherán defiende activamente sus bosques contra el crimen y la tala ilegal que imperan en Michoacán. La defensa se inició con un movimiento de las mujeres del pueblo, a partir del que se revitalizaron la organización tradicional y el autogobierno comunitario basado en los “usos y costumbres” que reconoció la Suprema Corte de Justicia. Cherán resiste la expansión de las huertas de aguacate y basa su producción forestal en la extracción de resina, seriamente afectada durante la pandemia, lo que lleva a muchos a trabajar como jornaleros, con fuertes riesgo de contagio por Covid-19.

El concurso de danza de los kúrpites, en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, preserva las tradiciones purépechas
Foto: Agenda anual Mariposa Monarca



Contaminación y pandemia en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi

Ramón Miranda

Correo-e: jamfrsmf@hotmail.com

En 2014, el derrame de sulfato de cobre acidulado de la presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México, calificado como el mayor desastre ambiental de la historia del país, generó enorme contaminación en las cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a más de 23 mil personas en los municipios de Ures, Baviácora, San Felipe Arizpe y Hermosillo.

La cuenca, tradicionalmente agrícola y ganadera, fue afectada inicialmente por la disminución de agua que generó la instalación de la minera. A partir del derrame, el agua y el suelo se contaminaron gravemente y los mercados rechazan los productos que allí se cultivan por temor a la contaminación. Cientos de campesinos han caído en condiciones de pobreza extrema.

Seis años después del desastre no se han atendido ni los impactos a la salud, ni a la economía de los ejidos. Tampoco la empresa ha cumplido los acuerdos que estableció para abordarlos: la construcción y habilitación de un hospital para atender los problemas de salud como la proliferación de cáncer, cinco veces más frecuente que hace seis años, y la construcción de veinte plantas purificadoras del agua.

Grupos de los ejidatarios afectados han creado el Comité de Cuenca del Río Sonora para enfrentar a la empresa, sosteniendo una larga batalla legal, en la que ha quedado de manifiesto la profunda desigualdad en el acceso a la justicia que impera en el país.

A esta larga crisis se añade el rápido incremento de los contagios de Covid-19, mu-



chos de los cuales se dan entre trabajadores mineros. A cinco meses del primer contagio en la región, hay gran desinformación y las instituciones de salud han perdido el control, carecen de materiales para enfrentar la pandemia. Las comunidades de la cuenca del río Sonora, somos muy vulnerables, los jóvenes salen a buscar su porvenir en las ciudades y en los Estados Unidos, ahora no pueden regresar fácilmente.

Los indígenas yaquis y seris están aun más desprotegidos

El río Sonora, México
Foto:
Portalambiental
Efe/Daniel Sánchez
Dorame

y son invisibles para los gobiernos. Durante la pandemia, las actividades de exploración y explotación de las empresas mineras han aumentado con total opacidad.

Las mineras han causado grandes daños y nulos beneficios a los pueblos de la cuenca. Como política empresarial, no contratan trabajadores locales, la mayoría de sus empleados provienen de Durango y Zacatecas. No se informa de los constantes derrumbes y derrames que ocurren en las minas. El relator de Nacio-

nes Unidad para Derechos Humanos y otras instancias internacionales han llamado a los gobiernos federal y estatal a atender los abusos cometidos en la cuenca, sin que estos se hayan respondido.

El gobierno estatal incluye a la minería como actividad preponderante en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero para los campesinos de la cuenca del río Sonora, la agricultura y la ganadería son las actividades que debieran considerarse como indispensables para el interés público.

En la cuenca amazónica, 350 pueblos están en riesgo de extinción

Marcela Vecchione Gonçalves y Marcio Halla

Correos-e: marcela.vecchione@gmail.com
y marciohalla1@gmail.com

La cuenca del río Amazonas comprende ocho países, 60 por ciento de su extensión corresponde a Brasil. A lo largo de toda la cuenca, los pueblos enfrentan desafíos brutales de desigualdad, despojo, violencia y enfermedades que se han magnificado con la pandemia.

En la Amazonia precolombina vivían cinco millones de personas, solo un millón de ellas sobrevivieron al Covid del año 1500, gran parte de la civilización amazónica se perdió.

Las fronteras de los países de la cuenca se trazaron sobre territorios indígenas, ocasionando un despojo continuo y violento. Los indígenas quedaron al margen de la constitución del Estado brasileño, elitista, con predominio de un racismo estructural y discriminación hacia los pueblos.

Algunos pueblos de la cuenca son extremadamente vulnerables a la pandemia, fueron "contactados" hace apenas 60 años, a partir de la construcción de la carretera Rondonia-Acre, cuya construcción se acompañó de mucha violencia.

La destrucción del Amazonas y la violencia contra los indígenas han cobrado gran intensidad en el gobierno del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promotor activo de los agronegocios y la minería. Hoy busca parcelar y abrir a los mercados las tierras colectivas en las áreas de transición del Amazonas, además de flexibilizar ampliamente la regulación ambiental. En cinco meses se han disparado el uso de agrotóxicos y la concentración de tierras, creando nuevos latifundios, apoyados por la militarización y el incendio de la selva. En agosto de



2020, un prefecto de Marco Rosso, epicentro de los agronegocios, llamó a los hacendados a quemar las selvas amazónicas, y para el 10 de agosto la extensión incendiada equivalía al área metropolitana de Sao Paulo, la mayor metrópoli del hemisferio sur. Las actividades ilícitas también se han incrementado durante la pandemia ante la disminuida capacidad comunitaria de vigilar y proteger la selva. Hay una alianza necropolítica entre el Estado y las empresas basada en una arquitectura diseñada para la impunidad y una sociedad muy polarizada.

Muchos trabajadores de las empresas extractivas que operan en territorios indígenas han enfermado de Covid-19 y lo han propagado, como en la mina de Carajas, en el estado de Pará, la mayor minera de hierro a cielo abierto del mundo, rodeada de tierras in-

Indígenas de la comunidad Parque das Tribos en Brasil lloran al líder de la tribu Kokama
Foto:
Sudamericarural.org,
Brasil
Michael Dantas/AFP

dígenas, donde los pueblos han hecho aislamiento comunitario. En las zonas cercanas a las ciudades, la deforestación es mayor y la Covid-19 se ha propagado con fuerza. Allí se ha abandonado el cultivo de las chacras –huertos familiares que se basan en el policultivo– y se enfrenta carencia de alimentos. Las mujeres buscan recuperar la seguridad alimentaria. Muchos jóvenes también se han reincorporado a las comunidades y promueven la conectividad digital de las comunidades.

Los pueblos desarrollan resistencias activas, conforme a sus modos de vida, buscando "las curas de la tierra", e impulsando plantíos comunitarios para evitar el hambre. Tienen claro que para salvarse como pueblos deben defender sus territorios. No quieren médicos ni hospitales, sino mantener sus territorios.

Frente a esta nueva colonialidad, los pueblos del Amazonas se movilizan en medio de la emergencia, buscando la protección constitucional de sus derechos sobre sus territorios.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado una emergencia indígena, ocupando las tierras y permaneciendo en las pantallas para denunciar el genocidio y el ecocidio que hoy viven, impulsado por los megaproyectos respaldados por los Estados. Sin los territorios, no hay posibilidad de salud ni continuidad de la vida de los pueblos amazónicos. Hoy existe un riesgo enorme de que se acabe con la ocupación fecunda de la selva, hábitat de una enorme biodiversidad, hogar de 350 pueblos indígenas, hablantes de 250 lenguas vivas.

En Centroamérica existen derechos comunitarios en riesgo de perderse

Ileana Monterroso y Andrew Davis

Correos-e: I.Monterroso@cgiar.org
y a.davis@prisma.org.sv

Los Estados centroamericanos son totalmente dependientes de la inversión extranjera. En todos sus territorios comunitarios e indígenas hay transmisión comunitaria de Covid-19 sin ninguna posibilidad de acceder a servicios de salud y cada vez hay menos tierra disponible para la agricultura familiar de subsistencia, debido al acaparamiento de tierras vinculado al creciente control criminal de los territorios.

En el Petén guatemalteco y la Misquita hondureña, los derechos comunitarios ganados en las últimas décadas están amenazados. En la Misquita, entre 2012 y 2017, se titularon más de un millón de hectáreas, cuyos dueños comunitarios son presionados por invasiones de criminales que han destruido sus medios de vida.

En el Petén, región con fuerte dinamismo social y escasa población indígena, 70 por ciento de las tierras corresponden a la reserva de la biosfera maya. El sistema de manejo forestal, impulsado en los años 90, mediante la dotación de concesiones forestales a grupos comunitarios, ha sido clave para conservar la selva. La conservación lograda por estos grupos reunidos en la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (Acafop) contrasta con la deforestación imperante en el resto de la reserva. Sin contar con el apoyo de las autoridades, recientemente la Acafop trabajó intensamente en el control de incendios que durante seis semanas provocaron grupos criminales.

A partir del aprovechamiento forestal sustentable, la Acafop ha generado em-



pleos estables para cientos de familias. Aunque con la pandemia se han perdido ingresos por la quiebra de los mercados de la madera, aun así la Acafop ha logrado concretar una venta de madera para la construcción de un puente de Brooklyn y realiza donaciones a los hospitales locales. A pesar de sus logros, las concesiones comunitarias enfrentan la amenaza de perder sus tierras para la creación del parque arqueológico de El Mirador.

El Petén es el departamento guatemalteco con mayor número de casos de Covid-19 y una declaración de alerta máxima. Frente a esta crisis, la respuesta del gobierno ha sido militarizar la región.

Trabajos en los bosques de El Petén, Guatemala
Foto: Acafop

Se viven así múltiples crisis que expresan la desigualdad y marginación imperantes, destacando la falta de acceso a servicios básicos como el agua y la salud.

Las comunidades han recurrido a la diversificación de las actividades económicas para enfrentar la crisis. La resiliencia comunitaria está ligada a la resistencia ante las amenazas, conflictos y presiones, y a la búsqueda del reconocimiento de derechos que requiere del fortalecimiento de la organización.

La recuperación de la pandemia en Centroamérica será lenta, beneficiará a algunas ramas productivas como el cultivo de frutas exóticas,

que en Petén está vinculado al crimen. Dada la ausencia de medidas contracíclicas es altamente posible que desaparezcan pequeñas y medianas empresas, el crimen y las elites económicas se fortalezcan, en medio de una fuerte represión de las protestas sociales en los sitios donde se imponen actividades extractivas y despojo. Es viable pronosticar nuevas turbulencias, ante las que se requieren reformas radicales, nuevas alianzas y narrativas que visibilicen las implicaciones de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en el desarrollo de enfermedades zoonóticas y en la exacerbación de los impactos del cambio climático.

Comunidades wichí sufren en el Chaco argentino, provincia de Salta

Chris van Dam

Correo-e: chris.vdam@gmail.com

Salta, donde habitan catorce pueblos indígenas, es la provincia más multiétnica de Argentina, con mayor extensión de bosques y biodiversidad. El Chaco, compartido por Argentina, Bolivia y Paraguay, es el segundo bioma boscoso más importante de Latinoamérica. Con un millón de kilómetros cuadrados, ha sido poblado históricamente por pueblos cazadores y recolectores. Desde fines del siglo XX, El Chaco, y más específicamente Salta, tiene una de las mayores tasas globales de deforestación, producto inicialmente de la llegada de pequeños ganaderos (desde fines del siglo XIX) y luego del obraje maderero.

En las últimas décadas se ha dado una fuerte expansión de la frontera agropecuaria que va arrinconando y expulsando a los indígenas, destruyendo sus medios de vida. Los indígenas, especialmente los wichí, arrinconados y despojados, luchan por el reconocimiento de sus tierras ancestrales, sobre las que nunca han tenido títulos de propiedad.

En 2020, obtuvieron un fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al gobierno argentino a reconocerles la propiedad de 400 mil hectáreas (Lhaka Honhat vs. Estado argentino). Sin embargo, durante los meses de pandemia, enfrentan represión y deforestación ilegal que ponen en evidencia la condición de abandono y de discriminación hacia los indígenas por parte del Estado.

Los aproximadamente 50 mil wichí que viven en Argentina, al igual que otros pueblos chaqueños, enfrentan



la pandemia en condiciones de extrema pobreza, desnutrición y falta de agua. Durante los primeros cuatro meses de pandemia y cuarentena los wichí se aislaron dejando de salir a trabajar como jornaleros, se cerró el turismo y se suspendió la venta de artesanías. La cuarentena ha afectado extremadamente su economía y en junio, a partir de la dificultad de cerrar efectivamente la frontera con Bolivia, se dispararon los contagios en el norte de Salta, expandiéndose

Wichis
Foto: La Verdad
Online de Junín

el virus en las comunidades wichí.

Cuando enferman, los wichí usan medicina tradicional, no acuden a los hospitales debido al maltrato y discriminación. Tienen dificultad de acceder a los programas de ayuda del gobierno argentino, por desconocimiento y falta de documentación.

Los gobiernos de América Latina, más allá de las simpatías políticas, sostienen los megaproyectos en gran medida por la necesidad de divi-

das para el pago de sus deudas externas. En Salta, el gobierno chino está promoviendo la instalación de megagranjas porcinas, con 12 mil vientres y una inversión de 3 mil 500 millones de dólares. Esto representa claramente una invitación a una nueva pandemia.

Aunque los indígenas argentinos son los primeros y los más afectados por los proyectos gubernamentales no tienen el peso electoral suficiente como para influir en sus decisiones.

En Bolivia, los indígenas prefieren sufrir de Covid que morir de hambre

Raúl Delgado

Correo-e: paqoniamauta@gmail.com

Más del 50 por ciento de los bolivianos pertenece a las comunidades indígenas aymara y quechua. De los 5 millones 570 mil indígenas, 3 millones viven en comunidades rurales dispersas, el resto en áreas periurbanas. Unos y otros, en condiciones de gran vulnerabilidad debido al cambio climático, el dengue, la influenza y ahora el Covid-19. Su acceso a servicios de sa-

lud es mínimo y las escasas clínicas en sus regiones carecen de medicamentos.

En Bolivia hay solo un médico por cada mil 500 familias, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de un médico por cada 300 personas. Luego de 14 años de gobierno de Evo Morales, las condiciones de salud no han mejorado. Su gobierno priorizó la construc-

Foto: Ministerio de Salud de Bolivia

ción de "elefantes blancos", coliseos y deportivos, contra la inversión en salud, educación y producción agropecuaria campesina. No se crearon empleos formales para los indígenas cuya expulsión de las zonas rurales alimenta los cinturones marginalidad alrededor de las ciudades. Son ellos quienes han sufrido los mayores impactos de la pandemia. Muchas mujeres se exponen en la búsqueda de sustento como vendedoras ambulantes, prefiriendo morir por Covid-19 que ver a sus familias morir de hambre. Enfrentan también el incremento de la violencia doméstica.

Las comunidades rurales mantienen prácticas y saberes tradicionales de producción, reciprocidad, contraprestación de servicios e intercambio de productos; prácticas y saberes que se repiten entre los pueblos indígenas del continente. Cuentan con fuerte organización para la gestión de recursos naturales, basada en sus usos y costumbres, reglamentos propios para el manejo de los territorios y recursos, particularmente el agua, con mínima participación del Estado. Son procesos autoorganizados, dinámicos y flexibles de adaptación y resiliencia. Pero las formas de organización tradicionales como los ayllus deben interactuar con autoridades de gobierno, como los alcaldes y prefectos, que fomentan la parcelación de la tierra y la mayor participación de la producción campesina en los mercados.

Como logro de las luchas indígenas, la normativa que rige la gestión de las cuencas mineras ha avanzado mucho. El agua se considera como

bien común, se reconoce a las organizaciones tradicionales los usos y costumbres locales para su manejo y los derechos de la Madre Tierra. Pero poco se aplican estas normas y no existe una ley para que el agua en las cuencas mineras –que se maneja con base en la Ley Minera, en favor de las empresas– sea manejada por las comunidades. Existe una fuerte contaminación del agua en detrimento de la salud y la producción campesina.

Las empresas buscan captar a las organizaciones sociales, sobornando líderes, dando trabajo en las comunidades, construyendo escuelas. Poseen gran poder económico y político, pueden doblegar a los Estados, de izquierda o de derecha.

Durante la pandemia se ha reafirmado el valor de la organización y la vida comunitarias, promoviendo el aislamiento y controlando las entradas a los pueblos. Se han formulado medidas propias de bioseguridad, se ha regresado a la agricultura y se han recuperado prácticas de reciprocidad en la distribución de alimentos, servicios, trabajo, trueque y medicina tradicional en condiciones de falta total de acceso a la medicina oficial.

También se ha fortalecido el intercambio entre aquellos indígenas que viven en zonas periurbanas en las partes bajas de las cuencas y los que permanecen en las comunidades en las partes altas, promoviendo el trueque de productos agrícolas por productos manufacturados (incluyendo mascarillas y gel). Las mujeres han tenido una participación muy significativa en esta integración económica.



El reto de recuperar a la naturaleza como fuente de bienes comunes

Leticia Merino, Marcela Vecchione Gonçalves, Roberto Stefani y Raúl Delgado

Correos-e: merino@sociales.unam.mx, marcela.vecchione@gmail.com, robertostefani@oxfamMexico.org y paqoniamauta@gmail.com

El panorama de las distintas regiones indígenas y campesinas latinoamericanas es estremecedor. La pesada herencia colonial y la economía neoliberal de las últimas décadas han conducido a violentos procesos de destrucción de comunidades y pueblos, en aras de un supuesto "desarrollo" que no ha hecho sino incrementar la desigualdad, la miseria de muchos y la ausencia de futuro para millones de jóvenes. Esta ola de destrucción social y cultural se da junto a un enorme deterioro ambiental que hoy amenaza al propio sistema Tierra.

Los gobiernos de la región, en la búsqueda de inversiones multinacionales, han ofrecido las tierras indígenas como disponibles para megaproyectos, incumpliendo abiertamente su función fundamental de proteger los derechos de la población, favoreciendo en cambio los intereses de las empresas. La destrucción socio-ambiental se justifica con discursos de soberanía nacional. Los críticos de los megaproyectos, ya sean ciudadanos o instituciones internacionales de derechos humanos, son denunciados como conspiradores y amenazas para el progreso; su criminalización se justifica en aras de un supuesto interés público. Esta censura contribuye al peligroso cierre de los espacios cívicos de discusión que acontece en distintos países.

El despojo y la violencia se dan tanto en tierras donde las comunidades y los pueblos cuentan con derechos reconocidos por los Estados, como sucede en México, Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia, Hon-



duras y Brasil, como en aquellas, como en Argentina donde los pueblos luchan por el reconocimiento de sus derechos. A lo largo del continente, los pueblos sostienen batallas legales desiguales, en condiciones de profunda debilidad del Estado de derecho. Aun cuando se obtienen sentencias favorables, su implementación suele quedar pendiente y la movilización social sigue siendo necesaria. La pandemia y la necesidad de encierro imponen retos adicionales a estos movimientos de defensa.

La declaración de la minería y de los agronegocios como actividades esenciales durante la pandemia, ha apoyado su expansión, legal e ilegal, cobijando violaciones contra defensores indígenas y comunitarios que se mantienen y

Sierra Tarahumara, Chihuahua, México
Foto: Revista TQV

amenazan con perpetuarse al concluir la pandemia.

En medio de la tragedia y las amenazas, las distintas experiencias muestran claramente que las comunidades y regiones que logran enfrentar al extractivismo y protegerse del Covid-19 son aquellas donde existe organización social consolidada, formas de autogobierno, economías locales, propiedad colectiva y gestión comunitaria de los territorios y recursos. Estas prácticas de acción colectiva son armas fundamentales de resistencia y resiliencia.

La gobernanza comunitaria y la protección del territorio se asocian claramente al desarrollo de economías locales. Destacan en este sentido las experiencias de distintas comunidades forestales en México y Petén, las cooperativas

productoras de café, cacao, maca y miel en Perú, Ecuador, Bolivia y México, y los prestadores de turismo comunitario en distintos países y regiones. Algunas de estas iniciativas que han logrado incluso hacer donaciones a los hospitales públicos, como han hecho los miembros de Acafop en Petén, Guatemala, donde el último hospital público se construyó en la década de los sesenta. Tristemente, estas experiencias, resultado de años de esfuerzos colectivos, carecen de visibilidad para gobiernos, más interesados en megaproyectos y en el asistencialismo que sostiene clientelas políticas. La pandemia pone de relieve la importancia de la organización y la economía locales, incluyendo la necesidad de fortalecer la agricultura doméstica y la se-

guridad alimentaria, objetivos olvidados a partir de la globalización económica.

La resistencia durante la pandemia y la reconstrucción posterior son y serán espacios en disputa. La vuelta a la comunidad y a lo local puede ser base para una reconfiguración social posCovid, aun en entornos urbanos donde se ha perdido el sentido de comunidad. La opción de actuar no es optativa, la acción colectiva amplia es necesaria para evitar escenarios catastróficos que no pueden ser parte de una nueva normalidad. En esta agenda son temas relevantes:

- ▼ El fortalecimiento de la identidad y la comunicación, mediante radios comunitarias y regionales en lenguas indígenas, incluyendo a migrantes y jóvenes, que pueden adquirir protagonismo en la reconstrucción a partir de su mayor capacidad de utilizar medios digitales.
- ▼ Visibilizar el papel de las mujeres en la vida comunitaria, asegurándoles protección frente a distintas formas de violencia.
- ▼ Promover y articular estrategias de salud y educativas comunitarias y regionales.
- ▼ Impulsar actividades económicas locales y regionales comunitarias y cooperativas, incluyendo el apoyo a la seguridad alimentaria y las actividades de jóvenes y mujeres. Haciendo posible generar una reapropiación productiva territorial.
- ▼ Las políticas públicas debieran orientarse a fortalecer la organización y las prácticas comunitarias, no a debilitarlas.
- ▼ Disminuir las cargas regulatorias y fiscales de las em-



presas comunitarias y campesinas, que contrasta con la desregulación y exenciones fiscales que benefician a las empresas extractivas.

- ▼ Construcción de nuevas relaciones campo-ciudad, fortaleciendo intercambios justos en los mercados regionales y nacionales, que reconozcan el valor de la producción rural como sostén de bienes comunes sociales y ambientales, como la sustentabilidad y la paz social.

Si bien muchas luchas sociales se enfrentan a los Estados, es importante luchar por el Estado, reclamando el cumplimiento de su razón de ser: contribuir efectivamente al bien público. Es necesario fortalecer el Estado de derecho, con mayor y más eficiente presencia en el combate a la ilegalidad, en una impartición imparcial de justicia, en la justeza y agilidad de trámites administrativos que promuevan la autogestión legal del aprovechamiento de los recursos naturales; impulsando actividades comunitarias y protegiendo la propiedad colectiva, claves para la preservación de bienes públicos y comunitarios como la paz, la salud y los beneficios ecosistémicos.

El Estado tiene un papel, hasta hoy insustituible, en la

Bolivia
Foto: Biblioteca virtual de los pueblos indígenas

disminución de la desigualdad mediante la redistribución de los ingresos y la riqueza. Ésta es una tarea largamente postergada en los países de América Latina, donde las exenciones y la evasión fiscales en favor de los dueños de las grandes fortunas son la regla. La reconstrucción pospandemia requiere de reformas fiscales profundas: que establezcan cargas fiscales justas para las empresas extractivas que aprovechan los bienes nacionales y gravan los patrimonios. Oxfam estima que si se cobraran impuestos a los patrimonios en México, la recaudación fiscal aumentaría entre 14 y 50 veces.

La pandemia es un vector que profundiza desigualdades, se prevé que al final de la infección existan en América Latina 70 millones más de personas pobres y 8 mil nuevos millonarios. Las implicaciones de este evento serán patentes en los años siguientes. Esta crisis nos remite a una reflexión sobre la desigualdad, sus manifestaciones y sus consecuencias: profunda desigualdad en el acceso a la justicia, los años que toma a los wichís obtener reconocimiento de derechos sobre sus territorios ancestrales y la rapidez con que las empresas agroindustriales y mineras acceden a tierra, incluso en el contex-

to de gobiernos progresistas. Desigual aplicación de restricciones para contener la pandemia, más fuertes para los ciudadanos y las comunidades indígenas y mucho menos para actores poderosos.

Como se expresa en este trabajo colectivo, la vulnerabilidad frente a la Covid-19 y sus impactos es desigual. Es necesario poner en el centro de los discursos sobre cambio social el tema desigualdad, porque es sin duda lo que más daña.

La reconstrucción posCovid-19 requiere basarse en un nuevo paradigma, que supere la visión economicista de crecimiento ilimitado, respete límites ecológicos y promueva la economía circular. No se trata solo de posiciones de izquierda y derecha, sino de una nueva mirada sobre la vida, superando la manipulación de la participación social y el desarrollismo que han impulsado los gobiernos de derecha e izquierda.

Son también necesarias nuevas perspectivas: no ver a los indígenas como víctimas, pues, a pesar de su vulnerabilidad y pobreza, son protagonistas de cambios y construcción de alternativas. También debe dejarse de mirar a la naturaleza en términos de recursos naturales y pasar a verla como fuente de bienes comunes naturales.

Referencias:
Gonzalo Aguirre Beltrán. Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizo América. Universidad Veracruzana, 1991.